

■ PLAZA DOMINICAL

Miguel Angel Granados Chapa

Mudanzas administrativas

■ Reacomodos políticos

Escucho, mientras escribo, la guitarra eléctrica y el sintetizador de un grupo musical con el que, trompeta de nuestros días, campana de la era moderna, se busca congrega a la población. Se trata de un mitin de Mario Viorneri, candidato priísta a la presidencia municipal de Pachuca, celebrado en el jardín de la colonia Morelos, de la capital hidalguense. Porque en esa entidad,

PLAZA DOMINICAL

Viene de la 1

como en el vecino estado de México, habrá también elecciones el 11 de noviembre próximo.

De ellas se habla menos que de las mexiquenses, gentilicio que disgusta a los políticos nacidos y hechos en ese estado, pues lo atribuyen a un esnobismo de recién llegados, como lo fue Alfredo del Mazo, que le dio vigencia. Es que los comicios en la entidad gobernada por Ignacio Pichardo Pagaza importan a la opinión nacional por los vicios del centralismo, ya que varios de sus municipios más importantes son prolongación de la ciudad de México, y reflejo de los fenómenos que ocurren en el Distrito Federal. Además, el propio gobierno federal los hizo anticipadamente llamativos, cuando sustituyó al gobernador Mario Ramón Beteta por el actual, como medida profiláctica frente al eventual rechazo de los votantes a un PRI cuyo jefe local era considerado, desde el PRI mismo, como inapropiado para concitar el entusiasmo de ciudadanos re-nuentes a seguir siendo crédulos.

Además, la presencia de las tres fuerzas políticas que reinarán en el escenario público en los años venideros confiere a las elecciones del estado de México el carácter de adelanto de lo que puede ocurrir en las federales de 1991, aunque el parangón entre ambas funciones comiciales requiere muchos matices y ajustes para que no conduzca a conclusiones falsas. De todos modos, eso atrae la atención, y la disminuye respecto de lo que debe acontecer en Coahuila el 28 de octubre, en Hidalgo dos semanas después y en Yucatán, a fines de noviembre. Por añadidura, hechos como la detención y procesamiento de Agustín Leñero Bores, ex alcalde de Naucalpan, y un incidente entre partidos en ese mismo municipio, agregan sabor y calor al guiso político mexiquense.

Leñero Bores no es el primer jefe de ayuntamiento que tras perder su posición en el reacomodo de noviembre del año pasado, ve cómo todo el mundo le vuelve la espalda mientras está en prisión. Ya los ex presidentes municipales de Chiconcoac, Calimaya y Coatepec Harinas han pasado por el mismo calvario, después de haber disfrutado de su Domingo de Ramos. Son víctimas de una doble constricción. Por un lado, la necesidad de aplicar la ley relativa al honesto manejo de los fondos públicos. Por otra parte, la exigencia a un equipo político para que gane las elecciones, aunque para ello sea preciso golpear a miembros del anterior, cuando hayan dado lugar a la acción legal pertinente. Leñero Bores, y el resto de los ex municipales encarcelados, sólo serán formalmente delincuentes cuando una sentencia lo determine. Hoy padecen la bárbara inquisición judicial mexicana, que pone en prisión a los acusados mientras se averigua si son o no culpables.

En el propio Naucalpan que Leñero Bores gobernó la mitad del periodo para el que fue elegido, Acción Nacional buscó montar un espectáculo que resultó fallido, si bien condujo a descubrir una estrategia priísta que se propone derrotar, simultáneamente, a la oposición y a la expectativa de su inminente desastre electoral. El candidato panista a la alcaldía naucalpense llevó a partidarios suyos y a periodistas a un local, "secreto" se dijo, en que cuadros priístas manipulaban documentación electoral oficial. Cerrado el padrón el 30 de septiembre, ya no hay modo de hincharlo o



Fernando Gutiérrez Barrios, Julio Alemán, Manuel Camacho Solís y Margarita González Gamio, en la comida que la ANDA ofreció a Carlos Salinas ■ Foto: Arturo Guerra

rasurarlos, porque los partidos tienen consigo las cintas magnéticas que, impresas, pueden evidenciar diferencias causadas con ánimo reprobable. El PRI, como sus contendientes, dispone de un primer ejemplar del padrón, que en efecto le sirve para modelar la elección, pero no violando la ley, sino aplicando su condición de partido poderoso. Al PRI le resulta posible identificar a los votantes, y conducirlos, mediante persuasión o coacción, ante las urnas el 11 de noviembre. Y es que el PRI, lejos de realizar un acto de contrición como la mayor parte de los partidos gobernantes en Europa del Este, resolvió no abdicar de su condición dominante y pretende mantenerla. Para eso pone en práctica acciones de promoción del voto que no violan formalmente la ley, aunque supongan aprovechar el priísmo ambiental que se ha vivido en el país entero. Por fortuna, el episodio organizado por el PAN, que el PRI consideró un allanamiento, será estudiado por una comisión plural surgida de la Comisión Estatal Electoral, cuyo presidente Humberto Lira Mora se ha empeñado en la concertación entre el gobierno, su partido y la oposición, de suerte que las elecciones reflejen lo que realmente quiere la población.

A diferencia del estado de México, en Hidalgo la disputa por los ayuntamientos ocurrirá principalmente entre el PRI y el PRD. El PAN parece haberse diluido, y apenas consiguió armar unas cuantas candidaturas, mientras que el partido de Cárdenas cubrió más de la mitad de las municipalidades, acción considerable en un estado donde la oposición ha sido borrosa y enclenque. También debe hacerse notar que el proceso de selección interna de los candidatos priístas dejó un saldo que, en lo inmediato, acaso disminuya el poder del partido dominante, por el tránsito de sus militantes despedidos al principal partido opositor, o al PARM; y en lo futuro quizá provoque un reacomodo de fuerzas, pues la tradicional presencia de factores de decisión como ex gobernadores y caciques quedó alterada. Por ejemplo, perdió la candidatura en Tullancingo Roberto Valdespino, muy cercano al arquitecto Guillermo Rosell de la Lama; y la de Tizayuca Octavio Soto, próximo a Jorge Rojo Lugo.

En Pachuca se enfrentan Mario Viorneri, un arquitecto a quien el gobernador Adolfo Lugo Verduzco ha impulsado a la secretaría general del

partido en Hidalgo, luego a la diputación local y ahora a la alcaldía; y Benigno Aladro, por el PAN, y Miguel Ángel Serna, por el PRD. Aquél representa a un sector tradicionalmente poderoso: el de los empresarios de origen español. Este encarna una historia que habrá de reproducirse con frecuencia. Su padre, el profesor Donaciano Serna Leal fue, además de ameritado maestro, líder magisterial, diputado, tesorero estatal y gobernador interino. Es decir, realizó una carrera priísta típica. Ahora su vástago, profesor en la Universidad Autónoma de Hidalgo, ha elegido el camino de la oposición, sin que ello implique rupturas personales, pues entre personas civilizadas no riñen el afecto y la convicción.

Tampoco son adversarios la convicción y el oportunismo, según parecen indicarlo los movimientos políticos del secretario de Hacienda, Pedro Aspe. Se creyera que está tomando tempranamente en serio su posibilidad de ser sucesor del presidente Salinas, y procura remediar una de sus obvias carencias, la falta de políticos en el grupo que inmediatamente lo rodea, compuesto preferentemente por *itamitas* bisoños aunque bien adiestrados en el arte de exprimir contribuyentes y enflacar al Estado. Aspe designó hace no mucho a Ángel Aceves Saucedo como director adjunto de Nacional Financiera, para acercarse a un sector de economistas-políticos como lo es el propio ex senador poblano. Ahora ha ido más allá, pues rescató del inminente desempleo a Gustavo Carvajal, dinosaurio por entero adverso a lo que Aspe quiere, es, representa y busca, y le confió la dirección de Banobras. Cuando conocí la noticia creí que había una confusión y que el nombrado era Horacio Carvajal, dueño de experiencia bancaria. Pero no, era Gustavo el nombrado. Claro que la dirección del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos no es posición meramente financiera. El que la ocupara otro político a la antigua, como fue don Enrique Olivares Santana, es antecedente válido para esta ocasión, ya que las funciones de esa institución, que acredita a gobiernos estatales y municipales, demandan conocimiento del panorama político nacional. Sin embargo, Olivares Santana ocupó el cargo inmediatamente después de salir de la Secretaría de Gobernación, mientras que Carvajal ha estado políticamente inactivo hace tiempo salvo su dedicación a dismantelar Tabamex, que no realizó con el cuidado debido y dañó

a los cultivadores de esa hoja.

La designación del ex presidente del PRI fue el último eslabón de una cadena de mudanzas administrativas y reacomodos políticos que se iniciaron con el nombramiento de Emilio Chuayfett Chemor como director general del Instituto Federal Electoral. Se aprovechó su vacante para hacer salir a Javier Coello Trejo de la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, una renuncia por la que clamaban no escasos sectores de la opinión. Lo reemplazó Jorge Carrillo Olea, ex subsecretario de Inspección Fiscal, y de Gobernación, que para desempeñar su nuevo cargo dejó la dirección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a donde fue a dar Fernando del Villar Moreno, hasta ahora director de Banobras.

Muy cercano al presidente Salinas y al regente Manuel Camacho —éste, secretario general del PRI, le confió en 1988 la delicada tarea de dirigir, como delegado del partido, el difícil proceso electoral de Tabasco—, el nombramiento de Del Villar probablemente indica, si no es desplazamiento lesivo a su carrera, que el jefe del Estado quiere dedicar atención personal a la seguridad nacional, y para eso prefiere una persona de su confianza a alguien con experiencia en la materia.

Pero el relevo más notable, en la semana que terminó, fue el protagonizado por Coello Trejo y Carrillo Olea. Este deberá dotar a la Subprocuraduría el carácter que debió tener, y que la personalidad de su antecesor impidió que ganara. Se trata de una oficina —ahora con el status de coordinación, ya que no siendo abogado Carrillo Olea no realizará acciones de ministerio público— que persiga el negocio de las drogas, en vinculación permanente con la DEA, en vista de la estrecha relación de México y Estados Unidos en materia de estupefacientes. Pero la alta misión confiada a esa dependencia no debe realizarse a cualquier costo, como lo creyó el abogado chiapaneco que ahora defenderá al consumidor. El respeto a las personas, aun delincuentes, ha de ser el principio esencial de sus acciones. Que eso dificulte en grado extremo su trabajo, es indudable. Pero si no se parte de tal premisa, nada distinguiría a los delincuentes de sus perseguidores.

La responsabilidad de Coello Trejo, por la cual su posición se hizo insostenible, consistió en ofrecer carta blanca a sus subordinados, en la inteligencia de que sus excesos serían tolerados si ofrecía resultados benéficos para la sociedad en el combate a las drogas. Se trata de una responsabilidad política. No aparece hasta ahora señalado como responsable de ningún ilícito. Por eso tiene sentido el que se le otorgue otra misión, no sólo para compensar sus éxitos innegables, sino también para no dejarlo expuesto a la vindicta de los enemigos que necesariamente genera una función como la que realizó. Sanción severa tiene ya en su contra, por las opiniones justas y adversas que su papel provoca, y que el contraste con su sucesor no hará más que acrecentar.

Cuando acabo de escribir, ha concluido el deslucido mitin, apenas presenciado por unas decenas de personas, del candidato priísta a la alcaldía pachuqueña. Y a finalizado también la Serie Mundial de beisbol, cuyo resultado estimulará a quienes se niegan a creer que la historia ha terminado: Los Rojos aún pueden ser campeones.